

AL LÍMITE PANORAMA EN LAS AMÉRICAS

El impacto devastador de los recortes en la ayuda para las personas forzadas a huir

Julio 2025

Glorianne y su hija Marybelle, refugiadas haitianas en Brasil, cuya ONG ayuda a mujeres y niñez refugiada y migrante de Haití a acceder a educación, salud y el apoyo contra la violencia de género. ©ACNUR/Marina Calderón

El impacto de los recortes financieros en la asistencia a las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza en las Américas

En 2025, la región de las Américas se enfrenta a un punto de inflexión humanitario. Una drástica reducción de la financiación de ACNUR y sus socios ha obligado a suspender o reducir servicios críticos para millones de personas desplazadas por la fuerza y apátridas. **En toda América Latina y el Caribe, las consecuencias son catastróficas: los sistemas de protección se están debilitando, las vías para la integración se están cerrando y las personas más vulnerables se están quedando atrás.** Aunque la región tiene todo el potencial para avanzar en temas de protección y soluciones, estas oportunidades están peligrando debido a la crisis de financiación, a raíz de la cual las condiciones de vida de millones de personas empeorarán dramáticamente, mientras aumentarán los riesgos de explotación y abuso, así como a la amenaza de nuevos desplazamientos.

Una región bajo presión

En las Américas viven casi 22 millones de personas desplazadas por la fuerza. **Sin embargo, este año sólo se ha cubierto el 20% de las necesidades financieras de ACNUR en la región.** Como consecuencia, **se ha recortado el 42% de los programas de la organización.** Los efectos son profundos y devastadores:



El reconocimiento de la condición de las personas solicitantes de asilo y refugiadas y los procesos de regularización se están viendo amenazados por los recortes, debido a la reducción de la capacidad institucional y a la ralentización en la tramitación de los casos.



En países como Colombia, Costa Rica, Chile y México, vivir sin una condición reconocida legalmente no solamente supone atrasos burocráticos, sino que se traduce en una inseguridad prolongada, un aumento de la pobreza —al quedar las personas refugiadas excluidas de un empleo formal— y una mayor vulnerabilidad a la explotación y los abusos.



Los recortes en los programas de integración local en Colombia, Brasil y Ecuador están aumentando el riesgo de xenofobia y de nuevos desplazamientos.



La suspensión de la asistencia a las personas desplazadas internas y retornadas está aumentando la presión sobre las comunidades locales.



La falta de apoyo a actividades de reintegración está contribuyendo a que se produzcan nuevos desplazamientos, lo que debilita la estabilidad regional.

Impacto en los países de la región

Brasil. Más de 335.000 personas están perdiendo el acceso a servicios esenciales como documentación, evaluación de las necesidades protección y orientación. Los recortes de presupuesto han interrumpido el apoyo a los servicios de alojamiento, retrasado el acceso a la asistencia jurídica y reducido el apoyo a los programas de medios de vida e integración.

Chile. 11.600 personas no recibirán asistencia básica, incluida ayuda para arrendamiento, asistencia jurídica y atención psicosocial. ACNUR ya no tendrá presencia en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia, lo que afectará a más de 5.000 personas que se beneficiaban de asistencia directa.

Costa Rica. Más de 6.500 solicitantes de asilo perderán el acceso a asistencia legal, quedando sin apoyo para recibir orientación y realizar gestiones en el sistema de asilo. Una reducción del 77% en la capacidad de registro está retrasando el acceso a servicios esenciales como atención médica, educación y empleo.

El Salvador. La cobertura territorial se ha reducido de 60 a 11 comunidades. Solo se están atendiendo los casos de protección más urgentes.

Haití. La finalización de los convenios de ACNUR con dos ONG nacionales en la frontera de Haití ha dejado a miles de personas retornadas —especialmente mujeres, niños, niñas y personas con necesidades específicas— sin servicios de protección esenciales. Este vacío las expone a mayores riesgos por necesidades humanitarias desatendidas.

Honduras. Los planes para ampliar la presencia en terreno se cancelaron; en su lugar, se cerraron tres unidades de terreno y nueve proyectos se suspendieron o finalizaron.

Perú. Solo 600 de las 3.000 familias previstas están recibiendo asistencia básica. ACNUR reducirá progresivamente su presencia en varias localidades y ya no tendrá un equipo dedicado para la tramitación de casos de reasentamiento.

Bolivia. La reducción de la asistencia en puntos fronterizos clave ha limitado el acceso a asistencia humanitaria vital para las personas más vulnerables. Cientos de personas desplazadas por la fuerza perderán el acceso a alojamiento de emergencia en La Paz, lo que dejará a las personas con discapacidad o condiciones médicas sin un alojamiento seguro o accesible.

Colombia. 500.000 personas venezolanas corren el riesgo de quedar sin documentación. Se ha suspendido la asistencia a 105.000 personas que viven en asentamientos informales y a las iniciativas de protección para 17.000 niños y niñas.

Ecuador. 17.000 personas ya no tendrán acceso a asistencia legal. 4.500 solicitantes de asilo podrían no acceder al procedimiento de asilo, y 4.000 personas desplazadas y apátridas no recibirán asistencia básica para cubrir necesidades como alimentos, alojamiento, vivienda y salud.

Guatemala. La presencia en terreno y las alianzas operativas se han reducido, con una disminución del 76% en el personal y de 10 a 4 socios. En 2025, solo 34,656 personas recibieron apoyo, lo que representa una caída del 67%, a pesar del número récord de solicitudes de asilo.

México. Una reducción del 30-40% en la colaboración de ACNUR con la COMAR ha provocado la pérdida de más de 50 empleos —principalmente personal de protección— debilitando gravemente el sistema de asilo. Esta reducción amenaza con agravar el retraso en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, dejando a miles de personas en un limbo legal y personal.

Oficina Multipaís en Panamá. La reestructuración regional provocó el cierre de las oficinas en Guyana y Surinam, habrá una menor presencia en Aruba y Trinidad y Tobago. La oficina de ACNUR en Darién se transformará en una Casa de las Naciones Unidas.

Venezuela. 15.000 personas refugiadas, retornadas y en riesgo de desplazamiento perderán el acceso a asistencia básica o a servicios esenciales como electricidad y agua, lo que debilitará la estabilidad comunitaria y aumentará el riesgo de nuevos desplazamientos.

RMRP 2025: Repriorización Bajo Presión

El [Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes \(RMRP\)](#) para América Latina y el Caribe también ha sido objeto de una “hiperpriorización”. La población beneficiaria se ha reducido de 2,3 millones a 577.700 personas, y el presupuesto de 1.400 millones a 447,3 millones de dólares. Los principales cambios incluyen:



Priorización de actividades vitales de protección, como alimentación, salud y alojamiento.



Reducción de las actividades de fortalecimiento del liderazgo local, especialmente de organizaciones lideradas por personas refugiadas y migrantes.



Reducción en las actividades de educación, medios de vida e iniciativas de integración sostenible.



Reducción de servicios esenciales para sobrevivientes de violencia, niñez no acompañada y prevención de la trata de personas.

Un llamado a la acción urgente

La comunidad humanitaria en las Américas se encuentra en un momento decisivo. Sin un financiamiento inmediato y con fondos flexibles por parte de los donantes, la región corre el riesgo de retroceder en los avances logrados con tanto esfuerzo en materia de protección, inclusión y estabilidad. ACNUR y sus socios siguen comprometidos con brindar respuestas basadas en principios, eficientes y centradas en las comunidades, pero no pueden hacerlo solos.

Para más información contactar a Natalie Schmidhaeussler, oficial sénior de relación con donantes, schmidth@unhcr.org